

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

SECRETARIA DEL INTERIOR

INSPECCION DE POLICIA URBANA NRO. 10 DESCONGESTIÓN

CONTRAVENCIÓN	Violación a la ley 388 de 1997 (modificada parcialmente por la ley 810 de 2003) infracciones urbanísticas
CONTRAVENTOR	Propietario del predio
CÉDULA	No indica
DIRECCIÓN	Carrera 22 No.54-94 barrio la concordia
RADICADO	20090-16

RESOLUCIÓN NRO. 008

(18 DE ENERO DE 2022)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

EL INSPECTOR DE POLICÍA URBANO NRO. 10 EN DESCONGESTIÓN, en ejercicio de la función de policía y de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por la ley 388 de 1997, modificada parcialmente por la ley 810 de 2003, y de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA, demás normas y circulares concordantes, y teniendo en cuenta los siguientes:

HECHOS:

- Mediante GDT 3972 de fecha 20 de septiembre de 2016, informa el secretario de planeación municipal que los profesionales del grupo de desarrollo territorial, adscritos a la secretaria de planeación de Bucaramanga, realizaron visita de inspección al predio ubicado en la carrera 22 No 54-94 barrio la concordia, del municipio de Bucaramanga, por lo cual se observó lo siguiente:

- En el momento de la visita se evidenció que se está realizando actividad constructiva en modalidad de obra nueva, la cual consta de 6 pisos de altura (incluyendo un piso de sótano), cubre un área aproximada de 1150,00 mts², se observó la valla informativa del proyecto expuesta en el predio con licencia con No de radicado 68001-1-11-0224 con fecha del 22 de julio de 2015, además se solicitaron documentos para adelantar este tipo de trabajos los cuales fueron presentados, por

Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
 Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II
 Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
 Página Web: www.bucaramanga.gov.co
 Código Postal: 680006
 Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

tal motivo este proyecto cumple con los requerimientos legales y vigentes para su ejecución.

- Se evidenció que el proyecto cuenta con bandejas de protección en los linderos del predio y espacio público que dan hacia la calle 54 y la carrera 22 respectivamente.
- El encargado de la obra atendió a los profesionales de la visita, indicando que actualmente no se están realizando labores en el sitio por vencimiento de la licencia.

La construcción incumple con el acuerdo 011 de 2014 POT artículo 375. protecciones y malla, cuando las edificaciones en construcción superen los tres pisos de altura, se deben implementar en todos los costados de las edificaciones, mallas de protección colgadas desde el nivel superior de la edificación hasta el primer piso, para evitar y/o controlar caída de materiales dentro el sitio de las obras o hacia el exterior del predio. Estas mallas deben estar cosidas en toda su longitud, mantenerse unidas entre si permanentemente y tener contrapesos o amarres a lo largo de la altura de la edificación y en su parte inferior para garantizar que se mantengan en su sitio. Estas mallas deben ser reemplazadas inmediatamente una vez se presente le deterioro.

2. Por lo anterior el informe precedente, fue remitido a la inspección de control urbano y ornato I y este despacho en fecha 18 de octubre de 2016, decidió avocar conocimiento, notificar al infractor, citarlo a descargos y practicar las demás pruebas que permitan el esclarecimiento de los hechos.
3. Así mismo, el día 18 de octubre de 2016, se envió a la oficina de instrumentos públicos, solicitud de certificado de libertad y tradición, así como citación al propietario del predio, para que compareciera al despacho con el fin de ser notificado del auto que avoca conocimiento.
4. Posteriormente el día 26 de octubre de 2021, se radico ante la secretaria de planeación municipal, solicitud de visita al predio objeto de investigación, esto con el fin de verificar si la infracción por la cual inicio el presente proceso aún persiste.
5. Recibiéndose el día 9 de diciembre de 2021, por parte de la oficina de la secretaria del interior el informe GDT 4757-2021 de fecha 9 de noviembre de 2021, mediante el cual la subsecretaria de planeación indica,

"teniendo en cuenta lo anterior, se pudo evidenciar que en el predio visitado presenta una contravención urbanística, ya que en el momento de la visita se evidencia que las infracciones que fueron objeto de verificación aún persisten, ya que no se presentaron los documentos aprobados por la curaduría urbana que certifiquen dichas labores constructivas, así mismo se observó que cuenta con la construcción de 1 piso de mas, con respecto al número de pisos visto en la visita realizada por los profesionales del grupo de desarrollo territorial adscritos a la secretaria de planeación mediante GDT 3972

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	Nro. CONSECUTIVO Resolución 008-2021
Subproceso: INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE FAMILIA, INSPECCIONES RURALES, PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL, PLANES Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD. Código Subproceso: 2200	SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / Comunicaciones Informativas Código Serie/Subserie (TRD) 2200-73 / 2200-73,04

16
**GOBERNAR
ES HACER**

del 20 de septiembre de 2016. Por lo tanto el inmueble está incumpliendo la normatividad urbanística (acuerdo 011 de 2014- plan ordenamiento territorial)".

- Que revisado el expediente de manera Integra, es posible avizorar que el fenómeno de la caducidad ha operado, por cuanto desde el GDT 3972 de fecha 20 de septiembre de 2016, a la siguiente visita realizada esto es el 9 de noviembre de 2021, han pasado 5 años sin que la administración haya adoptado una decisión de fondo respecto de la infracción presentada.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR,

• SOBRE LA NORMATIVIDAD DEL PROCEDIMIENTO POLICIVO POR INFRACCIONES A LAS NORMAS URBANÍSTICAS

El artículo 2¹ de la Ley 810 de 2003 que modificó el Artículo 104 Ley 388 de 1997, que a su vez sustituyo el artículo 66 de la Ley 9 de 1989, dispuso que las infracciones urbanísticas que dan lugar a la aplicación de sanciones, se determinan por parte de los alcaldes municipales y distritales o el funcionario que reciba la delegación, quienes la graduarán de acuerdo con la gravedad o magnitud de la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta. Por su parte, el artículo 108² de la Ley 388 de 1997, dispuso:

"ARTÍCULO 108. Para la imposición de las sanciones previstas en este capítulo las autoridades competentes observarán los procedimientos previstos en el Código Contencioso Administrativo, en cuanto sean compatibles a lo establecido en la presente ley."

Que el Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, fue derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, el cual entró a regir a partir del 2 de julio del año 2012

Que el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo³, señala:

"este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia."

*Esta norma fue derogada por el artículo 242 de la Ley 1801 de 2016, que entró a regir a partir del 29 de enero de 2017
Derogado por el artículo 242 ibídem
Ley 1437 de 2011*

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior."

En concordancia con lo expuesto anteriormente, el artículo 2 de la Ley 810 de 2003, fue derogado por el artículo 242 de la Ley 1801 de 2016.

Que así mismo, el artículo 239 de la ley 1801 de 2016, establece que:

"los procedimientos por contravenciones al régimen de policía, así como los procedimientos administrativos sustituidos por la presente ley, que a la fecha de la entrada en vigencia de la misma se estén surtiendo, serán adelantados hasta su finalización, conforme a la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciación."

Que está claro que, el procedimiento administrativo sancionatorio con el radicado número 20090-16 y que corresponde al caso sometido a estudio, se inició bajo el régimen jurídico anterior a la ley 1801 de 2016 y a su vez en vigencia del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, debiéndose culminarlo bajo lo regulado en la ley 1437 de 2011– (CPACA).

• SOBRE EL CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA EN ASUNTOS URBANÍSTICOS:

Sobre el tema en particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 31 de mayo de 2018, en el proceso radicado con el número 25000-23-24-000-2009-00299-01 y con ponencia de la Consejera Doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, siendo demandante Carolina Ortiz y Compañía S. en C. y otros contra la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., se pronunció sobre la facultad sancionadora en asuntos urbanísticos en vigencia del Código Contencioso Administrativo, así:

"ahora, el ejercicio de la facultad sancionadora de las autoridades administrativas urbanísticas se encuentra limitado desde dos perspectivas: una de tipo sustancial, relativa a la aplicación de los principios y garantías que se decantan de la cláusula general del debido proceso⁴, que morigeran sin lugar a dudas la puesta en marcha de la potestad de sanción; otra de naturaleza temporal, pues lo cierto es que ella –se hace referencia a la competencia de sanción– deberá ser desarrollada en los plazos establecidos en el sistema jurídico.

⁴ Artículo 29 constitucional.

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	Nro. CONSECUTIVO Resolución 008-2021
Subproceso: INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE FAMILIA, INSPECCIONES RURALES, PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL, PLANES Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD. Código Subproceso: 2200	SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / Comunicaciones Informativas Código Serie/Subserie (TRD) 2200-73 / 2200-73,04

GOBERNAR
ES HACER

Por expreso mandato del artículo 108 de la Ley 388 de 1997⁵, la imposición de sanciones por infracciones urbanísticas seguirá, en cuanto sean compatibles, los procedimientos previstos en el Código Contencioso Administrativo y, por consiguiente, su desarrollo debe sujetarse al precepto normativo contenido en su artículo 38, que en su tenor literal consagra:

"...salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas."

Se tiene así que los tres años con los que cuenta la autoridad administrativa tienen como punto de partida la ocurrencia del acto que pueda conllevar la imposición de sanciones, que en lo que concierne el subsistema urbanístico, se relacionan con la construcción o parcelación en zonas no urbanizables o parcelables o en la edificación de inmuebles sin la correspondiente licencia, por no citar que algunos ejemplos

Ahora bien, la hermenéutica del plazo oportuno para el ejercicio de la potestad sancionadora en cabeza de la administración no ha sido unívoca, pues a lo largo de los años la jurisprudencia ha erigido tres tipos de posiciones, sintetizadas elocuentemente por esta Sala de Sección, en decisión de 22 de febrero de 2018⁶, radicación 2500-23-24-000-2010-00348-01 en los términos que se exponen a continuación:

"...la Sala destaca que, hasta la expedición de la Ley 1437 de 2011, se habían sostenido tres tesis, a saber:

(i) Dentro del término de tres años que establecía el artículo 38 del Decreto 01 de 1994, debía expedirse únicamente el acto administrativo sancionatorio, sin que fuera necesaria su notificación ni el agotamiento de la vía gubernativa;

(ii) Se consideraba válido el ejercicio del poder sancionador con la expedición y notificación del acto principal dentro del término de caducidad de la misma, por estimarse necesario que el administrado conociera la decisión; y

(iii) El acto administrativo que refleje la voluntad de la administración respecto del procedimiento sancionatorio adelantado, debe quedar ejecutoriado dentro del término de caducidad, previsto en el artículo 38 del C.C.A., mediante la resolución y notificación de los recursos interpuestos para agotar la vía gubernativa."

En la actualidad, y a pesar de las discusiones que pudieron surgir al respecto, la posición mayoritaria al interior de la Corporación y, por lo tanto la que será acogida para despachar los cuestionamientos formulados con el escrito de apelación, corresponde a la

⁵ Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones

⁶ C.P. Rocío Araújo Oñate.

tesis intermedia según la cual, dentro los tres años siguientes a la ocurrencia del hecho que pueda conllevar sanción, la autoridad administrativa debe haber expedido el acto principal –aquel que impone reprimenda– y su consecuente notificación, sin importar que en ese plazo se haya decidido o no los recursos administrativos interpuestos en contra del mismo.

En palabras de esta Sala de Sección⁷:

"...cabe destacar que actualmente la posición mayoritaria al interior del Consejo de Estado corresponde a la tesis intermedia, en virtud de la cual basta que se haya expedido y notificado dentro de dicho lapso el acto principal a través del cual se impone la sanción. En efecto, resulta ser esta la tesis que se impuso, por haber sido acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por las Secciones Primera y Cuarta de esta Corporación, siendo entonces el criterio que gobierna esta clase de controversias.

El argumento que sustenta la tesis mayoritaria sostiene que el acto sancionatorio principal es "el que pone fin al procedimiento, resolviendo de fondo el asunto, con independencia de que el debate pueda continuar eventualmente si el interesado decide hacer uso de los recursos en vía gubernativa".

Si bien la sentencia acabada de citar resuelve el caso bajo las consideraciones del Código Contencioso Administrativo que establecía la caducidad de la facultad sancionadora en tres años de producido el **acto** que pueda ocasionar la sanción, lo cierto es que no existe un cambio sustancial en la Ley 1437 de 2011, salvo las adiciones que a continuación se transcriben:

*"Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los **tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas**, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.*

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.

⁷ Ibidem

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	Nro. CONSECUTIVO Resolución 008-2021
Subproceso: INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE FAMILIA, INSPECCIONES RURALES, PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL, PLANES Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD. Código Subproceso: 2200	SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / Comunicaciones Informativas Código Serie/Subserie (TRD) 2200-73 / 2200-73,04

18
GOBERNAR
ES HACER

La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria."

Es pues el tema tratado, conforme a la línea jurisprudencial emanada por la Honorable Corte Constitucional: "...la institución jurídica de la caducidad se fundamenta en que, a la administración, se le impone unas obligaciones relacionadas con el cumplimiento de sus deberes y su no ejercicio dentro de los términos señalados por la ley procesal, constituye una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional. La facultad sancionatoria de la administración, eminentemente reglada, está conformada por principios de legalidad y observancia del debido proceso, que se sintetiza "...como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia, precisando algunos aspectos que determinan y delimitan su ámbito de aplicación inicialmente, destacándose que se trata de un derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata, consagrado en el artículo 29 superior, que le reconoce directa y expresamente ese carácter, y en los artículos 6 y 209 del mismo ordenamiento, en los que se fijan los elementos básicos de la responsabilidad jurídica de los servidores públicos (art. 6) y los principios rectores que deben gobernar la actividad administrativa del estado (art. 209) dentro de ese marco conceptual, la corte se ha referido al debido proceso administrativo como "(I) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (II) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y, (III) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal" ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca "(I) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (II) la validez de sus propias actuaciones, y (III) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados". (Sentencias: C-875 de 2011; C-562 de 1997; C-680 de 1998; C-1512 de 2000; C-131 de 2002; C-204 de 2003 y C-598 de 2011)

Entonces, en vigencia del CPACA, se tiene que:

- I) *El término de tres años para la caducidad de la facultad sancionatoria se cuenta desde la ocurrencia de la conducta u omisión que pudiere ocasionar la infracción. En ese plazo el acto administrativo que impone la sanción debe estar notificado. Sin embargo, cuando se trate de un hecho o una conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución*
- II) *La caducidad del acto sancionatorio se entiende suspendida una vez se notifica el acto sancionatorio que define el proceso administrativo.*
- III) *El acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos en un término de un (1) año contado a partir de su debida y*

Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Código Postal: 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	Nro. CONSECUTIVO Resolución 008-2021
Subproceso: INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE FAMILIA, INSPECCIONES RURALES, PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL, PLANES Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD. Código Subproceso: 2200	SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / Comunicaciones Informativas Código Serie/Subserie (TRD) 2200-73 / 2200-73.04

oportuna interposición so pena de pérdida de competencia; que el recurso se entienda resuelto a favor del recurrente y la responsabilidad patrimonial y disciplinaria del funcionario que omitió resolver en tiempo⁸

Por otro lado, es dable exponer que la caducidad de la facultad sancionatoria puede ser declarada de oficio (Sentencia C-227-2009) toda vez que:

"...tanto la prescripción como la caducidad son fenómenos de origen legal cuyas características y efectos debe indicar el legislador; estas figuras procesales permiten determinar con claridad los límites para el ejercicio de un derecho. En virtud de la prescripción, en su dimensión liberatoria, se tiene por extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; por ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real o supuesta del titular. En tanto que la figura procesal de la caducidad ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La caducidad es entonces un límite temporal de orden público que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente (...).

Bajo los anteriores parámetros se resolverá el caso concreto.

• DEL DEBIDO PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

El procedimiento administrativo sancionatorio debe tramitarse conforme a las garantías propias del debido proceso⁹ consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y los principios constitucionales de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, entre otros. Entre las garantías, se resalta el deber de las autoridades para resolver la situación jurídica de quien es investigado dentro **los plazos razonables** dispuestos legalmente por cuanto la administración tiene el deber de actuar con diligencia en sus investigaciones sancionadoras. Así lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-181 de 2002, al precisar:

"...dentro de dichas garantías [en referencia al debido proceso] se encuentra el derecho a recibir una pronta y oportuna decisión por parte de las autoridades – no solo las jurisdiccionales sino las administrativas – lo que se traduce en el derecho a ser juzgado en un proceso sin dilaciones injustificadas.

⁸ Corte Constitucional en Sentencia C-875 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

⁹ El debido proceso se ha definido como "el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante los jueces una recta y cumplida decisión sobre sus derechos (Sentencia C-339 de 1996 M.P. Julio Cesar Ortiz Gonzáles

PROCESO: APOYO A PROCESOS POLICIVOS, SEGURIDAD PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA, PROYECCIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO	Nro. CONSECUTIVO Resolución 008-2021
Subproceso: INSPECCIÓN DE POLICIA URBANA, COMISARIAS DE FAMILIA, INSPECCIONES RURALES, PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL, PLANES Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD. Código Subproceso: 2200	SERIE/Subserie: COMUNICACIONES / Comunicaciones Informativas Código Serie/Subserie (TRD) 2200-73 / 2200-73,04

GOBERNAR
ES HACER 19

Más allá de las consideraciones sobre el incumplimiento de los términos procesales, la jurisprudencia constitucional ha subrayado la importancia que tiene para la conservación de las garantías superiores, el señalamiento de etapas claras y precisas dentro de las cuales se desarrollen los procesos. Este cometido, a los ojos de la doctrina constitucional, es requisito mínimo para una adecuada administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.) y elemento necesario para preservar la seguridad jurídica de los asociados."

• DEL CASO EN PARTICULAR – INVESTIGACIÓN 20090-16

Ahora bien, atendiendo las ideas expuestas y descendiendo al caso subjudice, se colige que a la fecha de hoy es claro que la actuación administrativa sancionatoria no se llevó a cabo dentro del término legal, puesto que no se adoptó una decisión de fondo dentro de la presente investigación, pese a que han transcurrido 5 años desde la fecha de la primera visita en la cual se observó que la construcción no contaba con las mallas de protección que son obligatorias para las construcciones de más de tres pisos, como en este caso.

Ahora bien en cuanto a lo indicado en el GDT 4757-2021 de fecha 9 de noviembre de 2021, se evidencia que, la construcción ya está terminada por cuanto no podemos determinar la fecha exacta en la que la infracción cesó, así mismo indican que al parecer la construcción no contaba con documentos aprobados por la curaduría urbana, pese a que en la primera visita realizada en el año 2016, el profesional de planeación indico que, *"además se solicitaron documentos para adelantar este tipo de trabajos los cuales fueron presentados, por tal motivo este proyecto cumple con los requerimientos legales y vigentes para su ejecución"*.

Por lo cual mal haría la administración, en basarse en este último informe, ya que se tratarían de hechos nuevos y no se puede entrar a revivir términos, más aun cuando la obra ya está terminada.

Es así que, tal como se prevé en el artículo 52 del CPACA, ha operado el fenómeno de la caducidad ya que la administración contaba con 3 años, para imponer la correspondiente sanción y/o adoptar decisión de fondo, a partir de los hechos o de la última visita que hiciera seguimiento a la construcción, presupuestos que no sucedieron y en caso de hacerlo ahora, resultaría en un mayor desgaste para la administración, conduciendo a inocuidades o a la ineficacia jurídica, razón por lo que es un imperativo categórico declarar la caducidad de la facultad sancionatoria.

En mérito de lo expuesto y sin más consideraciones, la Inspección de Policía Urbana número 10 en calidad de Descongestión adscrita a la secretaria del interior de la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga, en uso de su función de policía y por autoridad de la Ley,

Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co
Código Postal: 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA en el presente procedimiento administrativo sancionatorio con el radicado número 20090-16, que se adelantaba contra el propietario del predio ubicado en la Carrera 22 No.54-94 barrio la concordia, como presunto responsable de haber realizado una construcción sin el lleno de los requisitos legales. Decisión que se adopta acorde a lo regulado en el artículo 52 de la ley CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, tal como fue expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: INDICAR que la decisión adoptada en el artículo primero de la parte resolutive de este proveído, no es óbice o justificación para que el propietario del predio ubicado en Carrera 22 No.54-94 barrio la concordia, se acoja a las previsiones establecidas en el plan de ordenamiento territorial de Bucaramanga.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE personalmente la presente providencia advirtiendo que contra la presente decisión procede el recurso de Reposición ante este Despacho y el recurso de Apelación ante el superior jerárquico – Secretaria del Interior Municipal – los cuales deberán ser interpuestos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación en los términos del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: ARCHIVAR ESTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CON EL RADICADO NÚMERO 20090-16, una vez notificada y ejecutoriada la presente decisión de fondo, realizando las inserciones de rigor en el sistema PRETOR de la secretaria del interior de la alcaldía de Bucaramanga, así como en las bases de datos de la inspección de policía.

Notifíquese y cúmplase,


LEIDY BLANCO RIVERA
inspector de policía urbano

Inspección de Policía Urbana Nro. 10 Descongestión